



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Sentencia Definitiva

Expediente N°: 32478/2015

AUTOS: “CONIFERAL SACIF c/ ADM. FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones ante esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la empresa CONIFERAL SACIF contra la Resolución Administrativa AFIP 126/2013 (DV-RRCO) que desestimo la impugnación presentada por CONIFERAL SACIF en cuanto se le reclama el pago de diferencias por contribuciones patronales ante el decaimiento del beneficio previsto en el Decreto 814/2001 artículo 2° inciso b) al superar el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos noviembre 2008 a agosto 2009 y abril 2011 a mayo 2012 reclamando un monto de \$ 8.836.157,38 de los cuales \$ 5.591.944,87 corresponde a capital y \$ 3.244.212,51 en concepto de intereses; liquidación que fuera actualizada a la fecha de presentación del recurso que aquí nos convoca (24/10/2013) arrojando un monto total en concepto de capital e intereses de \$ 10.581.084, 10. (Ver fs. 3 de actuación que corre por cuerda n° 11683-235-2013).

I.- Inicialmente cabe advertir que en las presentes actuaciones ante la falta de coincidencia entre las resoluciones y los periodos cuestionados según se desprenden de las actuaciones administrativas que corren por cuerda y el primigenio recurso acompañado en formato digital con fecha 11 de noviembre de 2022, este Tribunal procedió a intimar a la empresa actora a fin de que adjunte de forma correcta y ordenada el recurso de apelación que motiva esta intervención. Tal intimación fue cumplida con fecha 6 de diciembre de 2022.

Posteriormente, en fecha 7 de febrero del corriente se intimó a la parte actora para que denuncie en calidad de declaración jurada si ha promovido otra acción judicial por los periodos aquí cuestionados (Res AFIP 126/2013) y a la demandada para que manifestara lo que estimare corresponder.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#26972374#358097750#20230502102602715



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

La demandada con fecha 13 de febrero del corriente informó que no tiene conocimiento de la existencia de otro proceso en él que se reclamen los periodos que corresponden a la RES. AFIP 126/2013 (11/2008 a 08/2009 y 04/2011 a 05/2012). Por otro lado, la parte actora con fecha 22 de febrero del corriente declaró bajo juramento que no ha promovido acción judicial por los periodos aquí cuestionados (RES AFIP 126/2013). Tal extremo -en principio- sanearía cualquier vicio y/o supuesta hipotética nulidad que pudiera llegar a suscitarse y habilita el dictado de la presente sentencia.

II.- La impugnante en su extenso memorial alega la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a lo normado por el art. 15 de la ley 18.820, refiere la existencia de documental contable y efectúa diversas comparaciones tarifarias que demostrarían el frágil estado financiero de la empresa, a fin de acreditar sus dichos en torno a la imposibilidad de afrontar el pago del depósito previo. Subsidiariamente desarrolla sus agravios y sostiene que la resolución administrativa atacada es nula por incumplimiento del art. 1 inc “f” punto 2, 3 y del art. 7 inc. “b”, “d” y “e” de la Ley 19.549 por las consideraciones vertidas en libelo recursivo al que corresponde remitirse en honor a la brevedad. Por su parte, en cuanto al fondo de la cuestión destaca que el Decreto 814/01 en su artículo 2º genera un beneficio fiscal en favor de las PyMES entendidas las mismas de conformidad con la propia ley que las regula y la autoridad de aplicación que las define. Señala que existe una colisión normativa entre la ley de PyMES 24.476 (actualmente 25.300) y el decreto 1009/01 y modificatorias. Entiende que la Cámara Federal de la Seguridad Social debería otorgar prioridad a una ley de orden nacional y con origen en el Congreso por sobre un mero decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que modifica la característica del contribuyente con el solo objeto de negarles el beneficio fiscal. A su entender, no resulta un dato menor, el hecho que en el presente caso el Poder Ejecutivo este modificando mediante un exceso reglamentario al sujeto pasivo de la obligación tributaria, potestad reconocida a la órbita nacional, pero en cabeza del Poder Legislativo exclusivamente. Lo contrario significaría aceptar que AFIP a través de la RG 1.009/01 y el Poder Ejecutivo pueden crear, alterar o modificar un sujeto de derecho sobre el cual recae un tributo, facultad propia del Congreso de la Nación de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 de la Constitución Nacional. En conclusión, considera que la cuestión litigiosa se centra en determinar el monto máximo de facturación que debe considerarse para que un contribuyente pueda gozar del beneficio de reducción de Contribuciones Patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social previsto en el art. 2 inc b) del Dec, 814/01 y art. 1 del Dec. 1009/2001 vigentes ambos durante los periodos fiscales reclamados.

Por su parte, el organismo interviniente en su escrito de réplica resalta la omisión en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previsto en el art. 15 de la ley 18.820, el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

art. 12 de la Ley 21.864 y el art. 26 inc. b) de la Ley 24.463, en virtud del cual el apelante debió depositar en garantía el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa, produciendo su omisión la deserción del recurso. Por otro lado, subsidiariamente sostiene que no existe un concepto único de PyME que defina todas las unidades productivas, sino que hay que considerar cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME que adoptó el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto 1.009/01 para la aplicación del Decreto 814/01. Afirma entre otras cosas que en cuanto a la remisión que efectúa el Decreto 1009/01 a la Resolución SPyME N°24/2001 es con la única finalidad de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus productos o servicios pero el concepto de PyME a los efectos de la determinación de la alícuota a aplicar es la que surge de dicho decreto ya que en este aspecto no ha sido modificado el límite de \$ 48.000.000 y en virtud de ello todo empleador encuadrado en los sectores “servicios” o “comercio” cuyo producido total anual supere ese límite deberá tributar conforme alícuota prevista en el inciso a) del artículo 2do. del Decreto 814/01. El Decreto 1009/01 en su artículo 1° reglamenta las condiciones de aplicación del Decreto 814/01 -art. 2°- las que no pueden ser modificadas sino por disposición de una norma que ostente al menos la misma jerarquía. Ello así el tope de \$48.000.000 establecido por el artículo 1° del Decreto 1009/01 podría ser modificado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la emisión de un nuevo decreto, pero se mantiene inalterable ante el dictado de normas de inferior jerarquía como son las dictadas por la SPyME salvo en lo que es materia de remisión expresa, que en relación al monto de \$ 48.000.000 no acontece. El Decreto 1.009/01, conforme argumenta el organismo, no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas por la SPyME 24/01, por la Res. 675/02 y la Disposición 147/06.

III.- Ahora bien, ante la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante refiere la imposibilidad efectiva de dar cumplimiento a dicho pago y a fin de acreditar sus afirmaciones acompaña diversos balances, estado patrimonial de la empresa e informe técnicos contables suscripto por el contador público González Juan Marcelino Mat. 10.04704.2 (Ver fs. 73/95 de expte papel).

Entiendo prudente habilitar la presente instancia dado lo elevado del monto que se reclama y que, en principio, la infraccionada carecería de fondos líquidos suficientes para afrontarlo sin comprometer sus recursos financieros y otras obligaciones asumidas con sus acreedores pues la solución contraria podría importar una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN). Ello, con el agravante de que nos encontramos frente a una empresa que brinda un transporte público de pasajeros en la provincia de Córdoba.

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#26972374#358097750#20230502102602715



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros).

IV.- En consecuencia, visto las actuaciones administrativas, corresponde hacer la siguiente evaluación:

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013, 357/2015 , 11/2016 ,103/2017,154/2018 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala I Expte 99680/2012/1/RH1 “Cooperativa Eléctrica Lujanense Ltda c/ Administración Federal de Ingresos Públicos”, Sala II Expte 19649/2020 “Guardian SRL c/ AFIP S/ Impugnacion de Deuda” sentencia del 14/11/2022, Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2, y recientemente la CSJN en Expte CSS 93739/2011/1/RH1 y Otros SOS SA c/ Administración Federal de

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#26972374#358097750#20230502102602715



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Ingresos Públicos” sentencia del 12 de diciembre de 2017, dejó firme por aplicación del art. 280 CPCCN el criterio aquí propuesto.

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformada por la ley 27430. Asimismo, la [Ley 27541](#) vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Por lo que se propone la revocación de la resolución recurrida en los términos indicados.

Dada la forma en la que se resuelve, deviene abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al organismo, conforme art. 68 del C.P.C.C.N. y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

En cuanto a la regulación de los honorarios, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por el profesional, tomando para ello en cuenta no sólo los montos cuestionados, sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados.

“La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo (voto del Dr. Carlos S. Fayt) (CSJN T. 315 , P. 1620).

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. 'c;/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018).

Se propicia regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 112 UMA, equivalente a PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS \$ 1.672.496 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 9/2023.)

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 112 UMA, equivalente a PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS \$





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

1.672.496 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 9/2023.), Importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

La empresa CONIFERAL SACIF cuestiona la Resolución Administrativa 126/2013 en cuanto le reclama el pago de diferencias por contribuciones patronales por decaimiento del beneficio previsto por el Decreto 814/2001 artículo 2° inciso b) al superar el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos noviembre de 2008 a agosto de 2009 y abril de 2011 a mayo 2012 reclamando un monto de \$ 10.541.940,47 (ver apelación acompañada a autos). Ante la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante refiere la imposibilidad efectiva de dar cumplimiento a dicho pago y a fin de acreditar sus afirmaciones acompaña documentación contable abarcativa del periodo inspeccionado (ver fs. 64/95).

Coincido con mi distinguido colega de Sala en la necesidad de proceder a la apertura de la presente instancia dado lo elevado del monto reclamado y haber acreditado la presentante que el cumplimiento de la exigencia prevista por el artículo 15 de la ley 18.820 podría traducirse en un serio compromiso de su situación económico financiera, debiendo priorizarse el debido derecho de la defensa en juicio (art. 18 CN).

Sin perjuicio de lo anterior, debo disentir en cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento.

Ello así y antes de entrar específicamente al fondo de la cuestión traída a consideración de este Tribunal, la apelante plantea la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 126/2013 por considerarla nula atento no tener en consideración los principales argumentos esgrimidos por la encartada.

No advierto que el agravio sea viable. Lo que el apelante denuncia es arbitrariedad en la emisión del acto administrativo y no un acto que lo invalide como tal.

El artículo 14 de la ley 19.549 establece que: El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos: a) cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. b) cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo en este





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

En otras palabras, para que un acto administrativo sea declarado nulo es necesario que sea antijurídico, lo que no sucede con la resolución administrativa aquí atacada, siendo el vicio denunciado subsanable mediante el recurso de apelación presentado.

Tal como se expresara al comienzo de este voto, el organismo fiscal determinó deuda al apelante en concepto de aplicación indebida del Decreto 814/01 correspondiente al período noviembre 2008 a agosto 2009 y abril de 2011 a mayo 2012. A tal fin consideró que la empresa en cuestión no encuadra, en el lapso referido, en la categoría PyME en los términos previstos por la ley 24.467, a los fines de ingresar una alícuota reducida de conformidad con lo previsto por el Decreto 814/01 y ley 25.565.

La parte actora se agravia en cuanto a que el organismo fiscal para excluirlo de la categorización como PyME le aplicó la Resolución N° 24/2001, como así también la Resolución de AFIP N° 1095/01 que establecieron un tope de \$ 48.000.000, a los fines del encuadramiento de una empresa como PyME, cuestionando la legalidad del Decreto 1009/01. Sostiene que tanto este último decreto como la Resolución de AFIP 1095/01 no instrumentan un programa específico ni determinan una región cuya especificidad requiera de los mismos.

Afirma que la intención del Decreto 814/01, en cuanto genera un beneficio fiscal, lo es en favor de las PyMES, entendidas las mismas de conformidad con la propia ley que las regula y la autoridad de aplicación que las define. En el caso existe una colisión normativa entre la ley de PyMES 24.476 (actualmente ley 25.300) y el Decreto 1.009 y sus modificatorias por lo que el Tribunal deberá priorizar una ley de orden nacional por sobre un decreto que modifica las características del contribuyente con un solo propósito recaudatorio. Debe tenerse en cuenta, según expresa, que el Poder Ejecutivo, a través de un exceso reglamentario, está modificando el sujeto pasivo de la obligación tributaria lo que constituye una potestad que corresponde únicamente al Poder Legislativo.

Entiendo que no asiste razón al recurrente en su planteo.

Conforme surge de la normativa en análisis, el decreto 814/01, en su artículo 2° inciso b) (conf. modificación practicada por la ley 25.453) consagró una alícuota reducida en concepto de contribuciones patronales para los empleadores que encuadren como PyME en los términos previstos por la ley 24.467. Esta ley encomendó a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serían definidas como PyME (conf.art. 2) Por su parte el artículo 83 de la ley, definía a las PyMES como aquellas que posean un plantel no superior a los 40 trabajadores (inciso a) o que tuviesen una facturación anual inferior a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de la ley (inciso b). El artículo 105, creaba la Comisión Especial de Seguimiento, una de cuyas funciones era determinar el monto de la facturación anual, a los efectos previstos en el artículo 83 mencionado.

El Decreto 943/97 de incorporación de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa al ámbito del Poder Ejecutivo determinó como objetivo de la misma entender en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de la ley 24.467 y de las disposiciones dictadas en su consecuencia, en su carácter de autoridad de aplicación.

El Decreto 146/99 (que reglamenta la ley de PyMES) a través de su artículo 10 estableció que la Comisión Especial de Seguimiento cuya finalidad es evaluar la procedencia de la modificación del monto de facturación anual previsto en el inciso b) del artículo 83 de la ley 24.467 debía reunirse una vez al año constituyendo la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente de la Presidencia de la Nación, un organismo de consulta de esa Comisión.

Con la sanción de la ley 25.300 (ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa) nuevamente se derivó en la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas como tales (art. 1). En esta inteligencia es que la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, sanciona la Resolución 24/01 que establece los montos de facturación a los fines del encuadramiento como PyME (de \$48.000.000 para el caso de comercio y de \$ 2.000.000 para el caso de servicios).

Posteriormente el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1009/01 dispuso aplicar la pauta numérica de la Resolución 24/01 a los efectos de determinar la excepción consagrada por el artículo 2° inciso a) del Decreto 814/01, criterio este que es seguido por el organismo fiscal con la sanción de la Resolución General N° 1095.

Planteada así la cuestión el problema que se suscita en autos radica en que en el año 2002 la secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa dictó la Resolución 675/02 por la cual actualizó los montos a los fines de la configuración del carácter de una empresa como PyME estableciendo el mismo en \$86.400.000 para el comercio y de \$ 21.600.000 para las empresas cuya actividad son los servicios, normativa que no fue recepcionada por resolución fiscal alguna. Es más, conforme surge de los considerandos de la Resolución 24/01 como así también de la Resolución 675/02, las mismas fueron dictadas a los fines de reglamentar el artículo 1° de la ley 25.300, cuyo objetivo es el fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas, situación esta que se vio plasmada entre otros instrumentos por el artículo 2° de la ley en cuestión, a través del cual se crea el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de

Fecha de firma: 03/05/2023

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#26972374#358097750#20230502102602715



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

realizar aportes de capital y brindar financiamiento a las mismas, y no a los fines de reglamentar la ley 24.476.

En virtud de lo anterior y tal como lo sostiene el organismo fiscal, la norma en cuestión fue reglamentada a los fines de la excepción prevista por el artículo 2° inciso a) del Decreto 814/01, a través del Decreto 1009/01 y de la Resolución General de AFIP 1095 que, en su momento, decidieron adoptar la pauta numérica referida por la Resolución N° 24/01 sin que ello implique que las posteriores actualizaciones que se realicen sobre la misma impacte sobre el monto normado por el Decreto 1009/01, en la medida en que el Poder Ejecutivo no lo determine.

Por lo anterior entiendo que corresponde confirmar lo decidido en la instancia administrativa.

Cabe aclarar que los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (noviembre de 2008 a agosto de 2009 y abril 2011 a mayo 2012) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Con respecto a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad, extensión, complejidad de la labor realizada y la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación se regulan los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en \$ 223.995 y \$ 149.330 respectivamente, por lo que propongo: declarar habilitada la presente instancia judicial, se confirme la resolución recurrida, imponer las costas a la impugnante (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en \$ 223.995 y \$ 149.330 respectivamente, importes a los que deberá agregarse IVA en caso de corresponder (CSJN “Compañía General de Combustibles SA s/recurso de apelación” sent. del 16/06/2003 Fallos 316:1533).

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Fantini.

En mérito de lo que resulta del acuerdo mayoritario, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. 2) Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en 112 UMA, equivalente a PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS \$ 1.672.496 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 9/2023.), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

apelación “sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533). Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la demandada deberá estarse a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 27423.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI
Secretaria de Cámara

JSM

